106

La excepción de demanda inepta que importa la de irresponsabilidad, se debe resolver en la sentencia.

Recurso de nulidad interpuesto por la Peruvian Corporation, en la causa que sigue con los tenedores de los certificados Watson.—Procede de Lima.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. Señor:

Viene al conocimiento de V. E., una cuestión de bastante importancia por la materia que se debate, por su entidad pecuniaria y aun por el calor con que se sostiene de uno y otro lado.

El infrascrito ha dictaminado contra la Peruvian Corporation en varias de las cuestiones judiciales que sostiene, y con el mismo espíritu justiciero que en ellas le guió, ha estudiado detenidamente este asunto, llegando a darle la razón en uno de los principales puntos de su defensa.

Prescindiendo de lo que no puede ser materia del recurso de nulidad, V. E. va a conocer de los autos de 1ª y de 2ª instancia, en cuanto declaran sin lugar las tres excepciones propuestas como dilatorias a la demanda de los tenedores de certificados Watson contra la Peruvian. Para penetrarse de ellas hay que comenzar por dar una idea de la demanda.

Por razón de los contratos de construcción de ferro-carriles del Supremo Gobierno con don Enrique Meiggs, éste era acreedor en una cierta fecha por la suma de S. 971.000 que el Gobierno no tenía con que satisfacer. Por esa época se había dado una ley de expropiación de las salitreras y se autorizó al Supremo Gobierno para levantar un empréstito hasta de L. E. 4.000.000, para pagar las oficinas y hasta L. E. 3.000.000, para aplicarse a obras públicas y a las necesidades generales del Estado. Mientras se conseguía ese empréstito el Supremo Gobierno autorizado por otra ley, comenzó a emitir certificados por el valor de las oficinas que adquiriría, títulos que eran generalmente al portador y sin expresión de la oficina de que procedían. En esas circunstancias don Carlos Watson, por el Directorio ejecutor de los contratos de ferro-carriles, solicitó que se le entregasen S. 971.000 en certificados de salitre para proveerse de fondos y evitar la paralización de los trabajos. Se le entregaron, en efecto, certificados en todo iguales a los que se emitían por compra de salitreras y los negoció en plaza obteniendo por ellos el producto neto de S. 955,000. Esos certificados fueron, sin embargo, considerados más tarde como distintos de los otros cuando se conoció su origen y la numeración que constaba en los libros de la compañía.

Los tenedores actuales de esos certificados, que no han conseguido por la vía que emplearon el ser pagados por el Gobierno de Chile, alegando éste que eran representantes de ferrocarriles y obras públicas del Perú, han apelado ahora al recurso de sostener que son acreedores refaccionarios de los ferrocarriles del Perú, porque ellos pagaron a Watson lo que el Supremo Gobierno de-

hía a Meiggs, se sustituyeron por los mismos en la acreencia que tenía como constructor y quedaron con hipoteca legal sobre los ferrocarriles. De ahí la demanda contra la Peruvian Corporation que posee hoy los ferrocarriles del Perú.

Contra esa acción se han propuesto las tres excepciones que vamos a examinar.

Inadmisibilidad de la demanda.—Se funda ésta en que los certificados que se llaman Watson fueron ilegalmente emitidos, que por esa causa no debieron ser negociados y que su transmisión no puede dar lugar al derecho real que se reclama. Esta alegación que saca su fuerza de la resolución legislativa que ordenó el retiro de esos certificados, no hace inadmisibile la demanda, porque el Poder Legislativo no los consideró nullos o falsificados, supuesto que declaró que podían devolverse otros certificados por la misma cantidad, y sobre todo, porque en las cuentas legalmente fenecidas con don Enrique Meiggs se le cargó la suma de S. 955,000 como producto de esos certificados.

Personería.—Se apoya principalmente en la manera como se ha constituido el Sindicato o Comité encargado de gestionar por el pago de los certificados Watson. En opinión del infrascrito nada vale todo lo que se alega a ese respecto: la personería de don Gavino Menchaca está bien definida con el poder que presenta y con los certificados que ha depositado.

Ineptitud de la demanda.—Como puede comprenderse esta excepción se funda en que la demanda se dirige contra diversa persona de la obli-

gada o responsable por lo que se reclama, y es la que a juicio del Adjunto requiere más detenido estudio.

Hay sin duda casos tangibles de excepción de demanda inepta, como son aquellos en que se demanda como sucesor de un individuo o como poseedor de una cosa al que resulta no serlo, pero no son los únicos en que el demandado puede librarse de la prosecución del juicio por ese medio de defensa. Este Ministerio sostiene que puede haber lugar a esa excepción, cuando de la propia estructura de la demanda, cuando del mismo desarrollo que se hace de la acción o del título en que se apoya, resulta que la obligación de responder no está en la persona a quien se atribuye; más claro, cuando la forma en que se presenta el derecho reclamado revela desde luego que otro es el responsable.

No puede sostenerse que en tales casos, por cuanto la excepción tiende a librarse de la acción implique siempre la perentoria de irresponsabilidad, porque entonces las excepciones de ineptitud estarían limitadas a los pocos casos tangibles que se han indicado y que no merecen marcar la naturaleza de una excepción tan importante en el procedimiento, desde que así sólo se refieren a marcar un error en la identidad del demandado. Si los tenedores de certificados Watson, presentando desnuda su demanda, hubieran reclamado el pago de una cantidad que aseguraban haber proporcionado para los ferrocarriles del Perú en cierta época, reservándose justificarlo en la estación de prueba, indudable es que la Peruvian no podría librarse del juicio por la simple negativa de la premisa, pues entonces ello formaba la misma cuestión de fondo; mas, cuando los tenedores del papel Watson exponen

cuanto es necesario para revelar la gestión de su derecho, o sea para presentar la condición legal que suponen tener hoy contra los ferrocarriles, puede la Peruvian aducir la ineptitud, si del propio relato resalta que no le concierne la responsabilidad que se reclama.

Bajo ese concepto va a examinar el Adjunto si está legalmente justificada la excepción que se propone.

Indudablemente que la operación que realizó Watson cuando recibió esos certificados de salitre, fué la de venta de unos valores fiduciarios que corrian en el mercado de Lima, sin que las personas que los compraron en esos días, probablemente por medio de corredor según era costumbre, se dieran quizás cuenta ni de la persona que los vendía, ni de la especialidad de esos certificados, ni menos de la aplicación que se iba a dar a su importe. A confirmar esto vienen las propias palabras de los demandantes, cuando relatando la operación de los certificados, dicen: como de un lado eran exactamente iguales a los provenientes de la compra de oficinas, y de otro llevaban a la parte de éstos la garantía de la fé nacional, pudo Watson obtener por efecto de esa operación S. 955.000. Al vencimiento de cada uno de los cupones éstos les eran pagados con religiosa y laudable exactitud al igual de los demás certificados; sólo salieron de esa dulce tranquilidad y se apercibieron de la diferencia entre unos y otros cuando se promulgó la resolución legislativa mandando recogerlos.

Bajo esos antecedentes, puede aceptarse que los primeros adquirentes del papel hicieron un contrato con efectos para los ferrocarriles. Puede creerse que entendieron pagar a Watson por cuenta del Gobierno y sustituirse en el cre-

dito contra éste? ¿Puede comprenderse que el vínculo civil que de ahí nació o la condición jurídica que se creó, fuese entre el comprador de certificados y los ferrocarriles del Perú?

Y si esas reflexiones surgen fijándonos en la persona de los primitivos poseedores de ese papel, mayor será su fuerza respecto de aquellos que sucesivamente los fueron adquiriendo por especulaciones posteriores, porque necesario es también recordar que esos títulos tuvieron una cotización más baja cuando llegó a descubrirse su especial condición.

El Adjunto no cree que se formó relación alguna del orden legal entre el comprador de ese papel y el poseedor de los ferrocarriles, como no se habría formado en el caso perfectamente análogo de que el Estado en lugar de dar al contratista certificados de salitre le hubiera dado cédulas o acciones del Banco del Crédito Hipotecario que hubiese tenido el Fisco.

Por la pérdida o enorme reducción de esos valores a mérito de la quiebra de ese Banco, no podrían ciertamente los tenedores actuales de esos títulos sostener que el dinero dado por ellos fué pago a Watson por cuenta del Gobierno y que como sustitutos quedaron en la condición de acreedores refaccionarios.

Aun puede verse con más viveza quizás la fuerza del símil, dándole otra forma: supóngase que el dueño de una finca hizo un contrato de reconstrucción, que falto de dinero al terminar la obra entregó al arquitecto unas cédulas del Banco de Crédito Hipotecario o los mismos certificados Watson; el arquitecto vendió esos valores y en tal virtud canceló su contrata; esos valores vinieron a la nada y entonces los tenedores de ellos se presentan contra el dueño actual de la

finca, que puede ser ya distinto del primitivo, promoviendo la acción de acreedor refaccionario o de hipoteca legal. Presentar el caso con esa nitidez es resolverlo rotundamente en sentido adverso a tal pretensión.

El Adjunto cree por otra parte que no puede haber hipoteca legal por consecuencia de un acto en que se convino constituir una hipoteca expresa y sostiene por lo tanto que en el orden legal la garantía de los certificados Watson subsiste en toda su fuerza sobre los terrenos salitrales de la Provincia de Tarapacá. La alegación de la Cancillería Chilena para no pagar tales certificados, fué hecha en circunstancias en que los Gobiernos Europeos que gestionaban por el interés de sus connacionales, sólo perseguían el primordial intento de que se pagara la gran masa de certificados a los que no se oponía ese defecto, pero realizado ese primer paso ha podido obtenerse para los otros un resultado análogo, si los tenedores de certificados Watson, defendiendo bien sus intereses, hubieran hecho presente que esos certificados, aunque no procedían de la venta de establecimientos salitreros, constituían un gravamen real debidamente impuesto por el antiguo Soberano, de ese territorio; porque en la provincia de Tarapacá no sólo existían como valor efectivo los terrenos en explotación o con oficinas sino también los terrenos salitrales pertenecientes al Estado y cuya adjudicación quedó prohibida por la ley de 28 de mayo de 1875.

Esa ley dijo en su artículo 4º: El Poder Ejecutivo contratará con garantía de los establecimientos que compre y de *los demás terrenos salitrales pertenecientes al Estado*, un empréstito que no exceda de L.E. 7.000.000, del que se apli-

carían 4 y 3 millones respectivamente, en la forma que ya se ha indicado.

Mientras se levantaba ese empréstito en Europa se hizo la emisión de certificados de salitre que siendo objeto de colocación de fondos en esta plaza, vinieron a representar los títulos del empréstito definitivo que se hubiera colocado en Europa. Así resulta pues, claro que el señor del territorio de Tarapacá en 1875, pudo lanzar títulos de crédito con hipoteca de él y que el Estado que lo ha sucedido en esos derechos y obligaciones, es hoy el responsable no sólo por los certificados que procedían de venta de salitreras sino también por los que se destinasen a obras públicas, porque el Gobierno del Perú tuvo a bien establecer ahí esa hipoteca, teniendo como objeto real de los últimos títulos los terrenos salitrales pertenecientes al Estado.

Si hubiera llegado a colocarse en Europa el empréstito de los 7 millones de libras, es indudable que respecto de cada bono no se sabría si su valor sirvió para compra de salitreras o para obras públicas; sin embargo, todos tendrían la garantía general de la propiedad fiscal antigua o recientemente adquirida y todos esos bonos de empréstito, habrían caído con igual fuerza y derecho contra la República de Chile, que conforme al Derecho Internacional ha reasumido ese territorio con todas las cargas existentes.

Si pues los tenedores de certificados Watson no obtuvieron antes el pago de ellos, es posible que hoy consiguieran una acción combinada diplomática en la faz que se dado al asunto, y si así no fuese, expedito tienen su derecho para entablar una demanda en forma ante los tribunales chilenos, como lo han hecho últimamente los representantes de la Compañía Salitrera del

Perú, por insinuación del mismo Gobierno que desatendió su reclamación.

Por último, encuentra el Adjunto como razón contra la procedencia de la demanda respecto a la Peruvian, la circunstancia de que ese pretendido derecho real no se inscribió en el Registro de la Propiedad, después que rige la ley de la materia, en cuyo caso aun habiendo existido el gravamen no puede perjudicar a terceros poseedores.

El Adjunto cree haber defendido en justicia los intereses del Fisco que tarde o temprano entrarían en juego y aunque sea posible que V. E. no estime ahora las razones alegadas para el efecto de la excepción debatida, quedarían ellas en pie para la resolución definitiva.

En conclusión, este Ministerio opina que no hay nulidad en el auto de vista confirmatorio del de primera instancia en cuanto declara sin lugar las excepciones de inadmisibilidad y de personería y que hay nulidad en la parte que desecha la de ineptitud, la cual debe declararse fundada para que los tenedores de certificados Watson dirijan su acción contra quien corresponda. Así se servirá V. E. resolver el recurso que se ha interpuesto, salvo el más elevado criterio del Supremo Tribunal.

Lim, 10 de octubre de 1893.

ARÁMBURU.

RESOLUCIÓN SUPREMA

Lima, 9 de enero de 1894.

Vistos; de conformidad en parte con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, y con el voto por escrito del señor Vocal doctor Elmore, que se agregará a los autos: declararon no haber nulidad en el auto de vista de fojas 122, su fecha 23 de agosto último, en cuanto confirmando el de primera instancia de fojas 106, su fecha 3 de julio anterior, declara sin lugar, por ahora, las excepciones de inadmisibilidad o irresponsabilidad y de demanda inepta, e infundada la de personería deducidas por el representante de la Peruvian Corporation; declararon improcedente el recurso de nulidad en lo demás que dicho auto de vista contiene; condenaron en las costas del recurso y en la multa de ciento sesenta soles a la parte que lo interpuso; y los devolvieron.

Loayza — Lama — Quiroga — Solar.

Se publicó conforme a ley, siendo el voto por escrito del señor Elmore, por la no nulidad, de que certifico.

LUIS DELUCCHI.

VOTO ESCRITO

En la causa seguida por el representante de los tenedores de certificados Watson con la Peruvian Corporation:

Vistos; de conformidad en parte con el dictamen del Ministerio Fiscal; mi voto es, porque se

declare no haber nulidad en el auto de vista de fojas 122 vuelta, su fecha 23 de agosto último, en cuanto confirmando el de primera instancia de fojas 106, su fecha 3 de julio anterior, declara sin lugar, por ahora, las excepciones de inadmisibilidad o irresponsabilidad y demanda inepta, e infundada la de personería, deducidas por el representante de la Corporation y que es improcedente el recurso en lo demás que dicho auto de vista contiene.

Lima, 9 de enero de 1894.

ALBERTO ELMORE.

Cuaderno N° 483.—Año de 1893.

107

No hay pacto válido contra la ley que fija la tasa del laudemio.

Recurso de nulidad interpuesto por doña Enriqueta Gómez vda. de Cárdenas, en la causa que sigue con el Convento de Santo Domingo, sobre comiso y consignación.—Procede de Lima.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. señor:

Fundado el auto de vista en la ley de 29 de diciembre de 1851, que ordena que lo estipulado